



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte n°: 68182/2018 AML

Autos: “FARMACITY S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte. N° 68182/2018

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I.- Surge de autos que mediante la Resolución N° 1014/2017 (DI CRSS), no se hizo lugar a la solicitud de revisión incoada por la contribuyente contra la Resolución N° 392/15 (DV TJSN), ratificando la deuda y multa confirmadas por la misma de acuerdo a lo expuesto en el dictamen que antecede.

II.- Surge de autos que se ha dado cumplimiento con el requisito de depósito previo, a los fines de la apertura de la instancia judicial, ante esta Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social, para su intervención.

III.- La apelante expresa que la resolución dictada por el organismo fiscal, debe ser revocada en atención a que no se ha ponderado correcta ni razonablemente los argumentos expuestos, ni la prueba “contundente” aportada que demostraría la real fecha de ingreso de los trabajadores en cuestión. Agrega que el organismo tomó la informada por los empleados al momento del relevamiento de personal.

Particularmente sobre el empleado Leandro Omar Domínguez, quien declaró ingresar el 1/07/2008, expresa que la real fecha es el 11/08/2008 y que avala sus dichos con la constancia de alta temprana, el formulario de designación de beneficiarios correspondiente al seguro de vida, la planilla con los resultados de exámenes pre ocupacionales, la declaración jurada de familiares, formularios ANSeS en donde el empleado manifiesta como fecha de ingreso el 11/08/2008, la copia del informe realizado por Alfa Médica Integral SRL en relación al examen pre ocupacional, la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en donde se absuelve a la empresa con relación a una presunta registración deficiente del Sr. Domínguez.

Respecto a la empleada Ileana Nair Páez, argumenta que un inspector de AFIP se constituyó en el local de Farmacity S.A sito en Avenida Santa Fe 3880 de la ciudad de Buenos Aires, y, al solicitarle que denuncie la fecha de ingreso por un error involuntario declaró el mes de abril de 2012 en lugar del 7/05/2012, a la que señala como correcta. También señala la prueba desatendida por el organismo fiscal al momento de dictar resolución, como la constancia de alta temprana, formularios ANSeS, declaración jurada de domicilio, copia de informe del alta médica emitida por Alfa Médica Integral SRL en relación al examen pre ocupacional, declaración ante



escribano público rectificando la fecha de ingreso manifestada en el relevamiento de personal,

Señala que el Fisco no ha valorado los elementos probatorios, al desestimarlos por el mero hecho de no coincidir con la fecha declarada por las personas relevadas al momento de llevarse a cabo el relevamiento.

Asimismo, solicita la inconstitucionalidad del punto 7.4.3.2 de la Resolución 79/98, toda vez que en relación a la Sra. Páez ha sido desestimada la prueba testimonial con fundamento en que la mencionada norma dispone que no corresponde admitir prueba distinta de la ofrecida al interponerse la impugnación.

En adición, considera improcedente la sanción aplicada, al considerar que no puede aplicarse ninguna conducta de las tipificadas por la RG 1566. Y también considera que existe falta de tipicidad subjetiva, en el entendimiento que no debe aceptarse un régimen de responsabilidad objetiva sin culpa lo que conllevaría a contrariar postulados del Derecho Tributario Penal.

IV) Surge de autos que, el ajuste que se cuestiona, tiene su origen en dos encuestas de personal realizadas por funcionarios del Fisco, los días 22 de septiembre de 2010 y 28 de agosto de 2012 en los locales comerciales de la rubrada.

En las mencionadas fechas, fueron relevados los Sres. Domínguez y Páez, quienes declararon haber iniciado actividades para la empresa el 1 de julio de 2008 y abril 2012, respectivamente.

La deuda determinada se fija por considerar que los trabajadores relevados habían ingresado con anterioridad a la tramitación de la clave de alta temprana, arribando a dicha conclusión por las declaraciones de ambos relevados.

Sentado ello, corresponde señalar que la Resolución N ° 899 (AFIP) y su modificatoria N ° 943 (AFIP) a fin de implementar el sistema de “Clave de Alta Temprana” estableció para los empleadores, la obligación de registrar a sus nuevos trabajadores dependientes con anterioridad al efectivo inicio de la relación laboral.

La Resolución 1891 (AFIP) fue dictada a los efectos de “perfeccionar el sistema y a optimizar las acciones que debe cumplir el empleador, dentro de un marco de mayor seguridad”. Asimismo, se implementó y aprobó el sistema informático que opera a través de la red de “internet” para que los empleadores puedan registrar las altas y bajas de sus trabajadores.

El art. 3 de la citada resolución, establece que la comunicación del alta en el Registro” deberá efectuarse dentro de los plazos que se indican, para el caso, el contenido en el inciso b) que establece “hasta el día inmediato anterior, inclusive, al de comienzo efectivo de tareas, cualquiera fuera la modalidad de contratación celebrada”.

A mayor abundamiento, el art. 22 de la mencionada resolución dispone que la fecha de inicio o cese de la relación laboral sólo será oponible, salvo prueba en contrario, ante la Administración Federal, en la medida en que se haya comunicado, respectivamente, el alta o baja en el “Registro”. A lo que agrega para el caso de alta en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1
el “Registro” también será requisito que el trabajador se encuentre denunciado en la declaración jurada determinativa y nominativa de las obligaciones con la seguridad social, correspondiente al mes de inicio de la relación laboral, de acuerdo a lo alegado por el empleador.

Y el art. 23 determina que los empleadores que incumplan –total o parcialmente– las obligaciones dispuestas por esta resolución general serán pasibles de las sanciones establecidas por la Resolución General N° 1566, texto sustituido en 2004.

Particularmente, en el caso de autos, surge de la planilla de relevamiento de trabajadores obrante a fs. 14 de la Actuación N° 15723-27459-2011, que el Sr. Leonardo Omar Domínguez, declaró haber ingresado el 1/07/2008, desempeñar tareas de atención al público y reposición, de lunes a sábados durante 8 hs. diarias con un franco semanal. Asimismo, en la Actuación Nro. 13289-21565-2015 obra la constancia de alta del trabajador, cuya fecha es del 11/08/2008.

Por otra parte, a fs. 7 de la Actuación Nro. 15800-10-2012, se observa la planilla de relevamiento en la cual la Sra. Ileana Nair Páez declaró, haber ingresado en el mes de abril de 2012, laborar de lunes a sábado durante 9 hs diarias, con un franco, en la sede de Av. Santa fe 3880, realizando tareas en el sector cosmetología. También, a fs. 258 de la Actuación Nro. 15265-7237-2014 obra la constancia de alta de la Sra. Páez que data del 2/05/2012.

Entrando a la cuestión a resolver, corresponde señalar en primer término que si bien este tribunal comparte el valor probatorio de las manifestaciones espontáneas y sorpresivas efectuadas por los empleados ante las autoridades administrativas, en el caso de autos los datos declarados no tienen aptitud para formar convicción respecto de la cuestión, pues en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la justa resolución de la cuestión. Pues, aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás “Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549”, pág. 29 y ss.).

Ello así, el organismo fiscal no ha merituado debidamente lo expresado por la parte actora ni la documentación aportada, precisamente las constancias de las claves de alta temprana y fecha de inicio de la relación laboral. Basa su decisión en la sola declaración de las personas relevadas, quienes pudieron equivocarse dado el tiempo transcurrido entre los ingresos a trabajar y la inspección efectuada.

También se observa, respecto al Sr. Domínguez y lo relatado en la descripción de agravios en cuanto a que, por Resolución D.R.F. 76376/2012 emitida por el



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del 12/11/2012 (ver fs. 341/343 de la Actuación Nro. 15265-7237-2014), el organismo fiscal desestima el planteo en el entendimiento que la misma absuelve a la responsable de la multa impuesta en relación a la fecha de alta “de cierto trabajador” sin que se detalle CUIL, concluyendo en que no resulta prueba idónea. El Fisco tiene absoluta facultad para determinar si la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, en la que justamente absuelven a la rubrada de la infracción imputada, había sido dictada con respecto al mencionado empleado. Sin embargo, el organismo fiscal se limitó a desestimar el planteo aludiendo a que la misma expresa que se menciona a “cierto trabajador, sin determinar nombre ni CUIL”, pudiendo haber averiguado cabalmente con el número de resolución y expediente administrativo claramente enunciado, de qué trabajador se trataba con exactitud.

De esta manera, la garantía del debido proceso legal lleva aparejado diversos elementos integratorios para el administrado; el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a que se dicte una decisión fundada que contemple sus alegaciones y resuelva sus pretensiones.

A mayor abundamiento, corresponde señalar que si en el proceso administrativo se procura la preparación y el dictado de actos administrativos con los cuales se satisface en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y los fines del Estado y en definitiva de la comunidad toda, no es menos cierto que estos actos están dirigidos por la exigencia de su legitimidad, o sea de su subordinación completa al orden jurídico del cual resulta todo lo atinente a la oportunidad, mérito y conveniencia (en este sentido, Escola Héctor J: Tratado General de Procedimiento Administrativo, Ed. 1975).

En los procedimientos de impugnación es el administrado quien pretende la actuación de la ley, en sentido lato, entendiendo que su pretensión procede más que la articulada por la Administración, sin perjuicio de que ésta ratifique su accionar.

García Oviedo señala que “las exigencias propias de un estado de derecho imponen a la administración un régimen jurídico que ordene su vida y al propio tiempo, garantice a los particulares sus situaciones jurídicas frente al obrar de aquella” (García Oviedo, Derecho Administrativo, Madrid, 1959, T. 1, PÁG. 619).

Por ello, en el procedimiento administrativo impera el principio de verdad material o real. La administración debe llevar a cabo las medidas de prueba que sean conducentes para determinar la realidad efectiva de los hechos. De esta manera, compete al organismo administrativo apreciar las probanzas producidas, no ya sobre la base de los principios rígidos sino de manera lógica y natural, aquilatando cada una de ellas en su tramitación previa resolución que se recurre.

Por todo lo expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida de acuerdo a las argumentaciones expuestas en la presente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

En similar sentido, se ha expedido esta Sala en autos “Johnson Acero S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Impugnación de Deuda”, sentencia 90594, del 7 de febrero de 2001.

V) Atento a como se resuelve la cuestión, no corresponde expedirse sobre los restantes agravios descriptos en el acápite III).

VI) En atención a que la AFIP no es equiparable con las partes en las contiendas judiciales comunes, sino que actúa oportunamente en defensa del interés general, las costas se imponen en el orden causado (cfr. art. 68 del CPCCN).

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1)- Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto; 2)- Dejar sin efecto la resolución recurrida de acuerdo a las consideraciones expuestas precedentemente, ordenándose el dictado de una nueva ; 3)- Ordenar al organismo a que reintegre la suma depositada por el apelante para acceder a la instancia judicial, con más sus intereses a la tasa promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha en que se hizo efectivo el depósito y hasta su devolución al depositante (conf. Art. 10, dto. 941/91; C.S.J.N. L. 44. XXIV “López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A., sentencia del 10/06/92 y Fallos 303:1769; 311:1644, entre otros); 4) Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

